

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana. Se suscribe en la imprenta de D. Ceáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados. Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCIÓN.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.

REAL DECRETO.

En atención á las consideraciones que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, y conforme á lo prevenido en el art. 6.º de la ley vigente de Diputaciones provinciales y en las disposiciones de mi Real resolución de 7 de abril de 1849,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se procederá á renovar en su mitad las Diputaciones provinciales.

Art. 2.º Se verificarán las elecciones observando puntualmente las formalidades, trámites y plazos contenidos en el tit. 5.º de la citada ley.

Art. 3.º Las Diputaciones se instalarán el día 1.º de abril en la Península é Islas Baleares, y el 1.º de mayo en Canarias, en cuyos días darán respectivamente principio á su primera reunión ordinaria del presente año.

Dado en Palacio á 5 de febrero de 1862. Está rubricado de la Real mano. El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Subsecretaría. Negociado 2.º

Para que tenga efecto el Real decreto fecha de hoy sobre renovación de las Diputaciones provinciales en su mitad, ha tenido á bien S. M. la Reina (Q. D. G.) mandar:

1.º Que las elecciones se verifiquen en los días 26, 27 y 28 del presente mes en la Península é Islas Baleares; y en los días 25, 26 y 27 del inmediato marzo en Canarias.

2.º Que en el V. S. de que con tres días de anticipación se publique en los pueblos de cada partido judicial el señalamiento de edificios ó locales adonde los electores deban concurrir á votar, así como la designación de las cabezas de partido y de las secciones.

3.º Que sin pérdida de tiempo remita V. S. á los Alcaldes de unas y otras las listas de los respectivos electores, bien entendido que dichas listas deberán ser, según lo prescribe en el art. 11 de la ley de Diputaciones provinciales, las de electores de Diputados á Cortes ultimadas en 15 de mayo de 1860.

4.º Que haga V. S. publicar en el Boletín oficial los títulos 2.º y 5.º de la citada ley, á fin de que se tengan presentes sus disposiciones.

De Real orden lo comunico á V... para los efectos correspondientes. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 5 de febrero de 1862. Posada Herrera. Sr. Gobernador de la provincia de...

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 58.

Gobierno. Negociado 1.º

En cumplimiento del Real decreto y Real orden preinsertos, los señores Alcaldes de Bande, Ginzo, Celanova, Orense y Verín, á cuyos partidos corresponde la renovación que se previene, dispondrán lo conveniente á fin de que en los días 26, 27 y 28 del presente mes tengan efecto las elecciones de los respectivos Diputados provinciales; teniendo presente que, en uso de las facultades que me concede la ley, designo como local para verificar dichas elecciones las Casas Consistoriales de las cabezas de partido, cuyos pueblos dejo expresados. Los electores que tienen derecho á tomar parte en esta elección, son los que resultan domiciliados en los pueblos que pertenecen al respectivo partido judicial, con arreglo á las listas para Diputados á Cortes ultimadas en 15 de mayo de 1860, y que por el correo de hoy remito á los señores Alcaldes de las cabezas de partido. Estos Alcaldes y los demás de los pueblos enclavados en el publicarán inmediatamente dichas listas, y procurarán que llegue á conocimiento de los electores la designación del local y días para la elección. Los Presidentes de las mesas electorales cuidarán de cumplir y que se cumpla puntual y exactamente cuanto les concierna y se previene en los dos capítulos de la ley que á continuación se insertan, y dictarán muy especialmente las oportunas disposiciones para que dicha elección se verifique con el mayor orden y legalidad, sin dar lugar en estos delicados actos á ninguna clase de faltas que, por leves que fuesen, no pudieran quedar impunes, y que confío no llegarán á ocurrir, atendiendo á las pruebas que tengo de la sensatez del cuerpo electoral y de la rectitud é imparcialidad de los señores Alcaldes.

Orense 13 de febrero de 1862. — Francisco Javier Camiño.

Los títulos 2.º y 5.º que se previenen insertar, dicen lo siguiente:

TÍTULO II.

Cualidades necesarias para ser Diputado provincial.

Artículo 7.º Para ser Diputado provincial se necesita:

1.º Ser español, mayor de 25 años.
2.º Tener una renta anual procedente de bienes propios que no baje de 3,000 rs. vn. ó pagar 500 de contribuciones directas. En los partidos donde no haya personas que tengan estos requisitos, por cada Diputado que deban nombrar se cumplirá el número con los mayores contribuyentes que se hallen inscritos en las listas de elegibles para los ayuntamientos del partido.

3.º Residir y llevar á lo menos dos años de vecindad en la provincia, ó tener en ella propiedades por las cuales se paguen 1,000 reales de contribuciones directas.

Art. 8.º No pueden ser Diputados provinciales:

1.º Los que al tiempo de las elecciones se hallen procesados criminalmente.
2.º Los que por sentencia judicial hayan sufrido penas corporales afflictivas ó infamatorias, y no hubieren obtenido rehabilitación.
3.º Los que se hallen bajo la interdicción judicial por incapacidad física ó moral.

4.º Los que estuviesen fallidos ó en suspensión de pagos ó con sus bienes intervenidos.

5.º Los que estén apremiados como deudores á la Hacienda pública ó á los fondos de la provincia como segundos contribuyentes.

6.º Los que sean administradores ó arrendatarios de fincas de la provincia y sus fiadores.

7.º Los contratistas de obras públicas de la misma y sus fiadores.

8.º Los que perciban sueldo ó retribución de los fondos provinciales ó municipales.

9.º Los jueces de primera instancia, los secretarios y demás empleados de los Gobiernos políticos, los consejeros provinciales, los contadores, administradores, tesoreros y demás empleados en la recaudación, intervención y distribución de las rentas públicas, los ingenieros civiles y los encargados de montes en las provincias donde se hallen destinados.

Art. 9.º Podrán excusarse de aceptar el cargo de Diputados provinciales:

1.º Los que habiendo cesado en el fuero de elegidos, no mediando el hueco de una renovación.

2.º Los sexagenarios ó físicamente impedidos.

3.º Los Senadores y Diputados á Cortes, y los individuos de Ayuntamiento, hasta un año después de haber cesado en sus cargos.

4.º Los funcionarios de real nombramiento que puedan ser elegidos.

5.º Los que al ser elegidos, no estén acaudalados en la provincia.

TÍTULO III.

Del modo de hacer las elecciones.

Art. 10. La elección de Diputados provinciales se hará en virtud de real convocatoria cuando haya de ser general; y en en virtud de orden del Gefe político de la provincia cuando sea parcial solamente.

Art. 11. Los Diputados provinciales serán nombrados por los mismos electores que elijan los Diputados á Cortes, sirviendo al efecto las mismas listas con las últimas rectificaciones que en ellas se hubieren hecho.

Art. 12. El Gefe político cuidará de la publicación de dichas listas para conocimiento de los electores, y las remitirá oportunamente á los Alcaldes de los pueblos cabezas de distrito electoral.

Art. 13. El Gefe político, tan luego como se publique esta ley, procederá, si el número de electores ó la distorsión de los partidos judiciales lo exige, á dividirlos en los distritos elec-

torales que mas conenga, y señalará para cabecera de distrito los pueblos donde mas fácilmente se pueda ir a votar. Hecho esta division, la pasará al Gobierno para su aprobacion. Si no hubiere necesidad de dividir algun partido judicial en distritos electorales, la eleccion se hará solamente en la cabecera del partido.

Art. 11. Aprobada por el Gobierno la demarcacion de los distritos electorales, servirá para todas las elecciones sucesivas, no pudiéndose hacer variacion alguna sin que la apruebe tambien el Gobierno en virtud de expediente que se formará al efecto.

Art. 15. El primer dia señalado para la votacion se reunirán los electores a las nueve de la mañana en el sitio designado con tres dias de anticipacion por el Alcalde de la cabecera de distrito, y bajo la presidencia del mismo Alcalde ó de quien haga sus veces.

Art. 16. Para la constitucion de la mesa se asociarán al Alcalde, Teniente ó Regidor que presida, dos electores nombrados por el mismo de entre los presentes. Los electores que concurren en el primer dia y primera hora de votacion, entregarán al Presidente una papeleta que podrán llevar escrita ó escribir en el acto, en la cual se designarán dos electores para secretarios escrutadores. El Presidente depositará la papeleta en la urna á presencia del elector. Concluida esta votacion se verificará el escrutinio y quedaran nombrados secretarios escrutadores los cuatro electores que hallándose presentes al tiempo del escrutinio hayan recibido á su favor mayor número de votos. Estos secretarios con el alcalde, teniente ó regidor presidente constituirán definitivamente la mesa.

Si por resultado del escrutinio no saliese el número suficiente de secretarios escrutadores, el Presidente y los elegidos nombrarán de entre los electores presentes los que faltan para completar la mesa.

En caso de empate decidirá la suerte.

Art. 17. Constituida la mesa empezará la votacion, que durará tres dias, á no ser que antes hubiesen dado su voto todos los electores del distrito. La votacion será secreta.

El Presidente entregará una papeleta rubricada al elector; este escribirá en ella dentro del local y á la vista de la mesa, ó hará escribir por otro elector, en nombre del candidato ó candidatos; y el Presidente introducirá la papeleta en la urna, delante del mismo elector, cuyo nombre y veracidad se anotarán en una lista numerada.

Art. 18. Las operaciones electorales empezarán á las nueve de la mañana y terminarán á las dos de la tarde.

Art. 19. Luego que se concluya la votacion de cada dia, el presidente y los secretarios harán el escrutinio de los votos, leyendo en alta voz las papeletas, confrontando el número de ellas con el de los votantes anotados en la lista, y estenderán del resultado el acta correspondiente.

Art. 20. En todo el escrutinio leerá el presidente en alta voz las papeletas, y del contenido de ellas se cerciorarán los secretarios escrutadores.

Art. 21. Cuando las papeletas contengan mas nombres que los precisos, serán nulos los votos dados á los últimos sobrañtes; pero valdrán los de las papeletas que contengan menos nombres que los precisos.

Art. 22. Terminado el escrutinio, y anunciado el resultado á los electores, se quemarán á presencia del público todas las papeletas.

Art. 23. Antes de las nueve de la mañana del dia siguiente se fijará en la parte exterior del edificio donde se celebre la eleccion, la lista nominal de todos los electores que hayan concurrido á votar el dia anterior, y el resumen de los votos que cada uno haya obtenido.

Art. 24. Al dia siguiente de haberse acabado la votacion, y á la hora de las diez de la mañana, el presidente y secretarios formarán el resumen general de votos, y estenderán el resumen general de todo el resultado, expresando el número total de los electores que hubiere en el distrito, el número de los que han tomado parte en la eleccion, y el de los votos que cada candidato haya obtenido. Copia autorizada de esta acta se remitirá al jefe político de la provincia.

Cuando la eleccion se hubiere hecho solamente en la cabecera del partido judicial, se proclamará Diputado provincial desde luego al que hubiere obtenido mayor número de votos; pero el escrutinio de que habla el párrafo anterior, se hará ante el Ayuntamiento pleno del mismo pueblo, en la forma y bajo la presidencia que se determina en el art. 26.

Art. 25. El presidente y los cuatro secretarios nombrarán de entre ellos mismos un comisionado para que lleve á la capital del partido copia certificada de acta del distrito, y asista al escrutinio general de votos. El acta original quedará en el archivo del Ayuntamiento.

Art. 26. Este escrutinio general se hará ante el Ayuntamiento pleno de la cabecera del partido, á los seis dias de haberse concluido las elecciones en los distritos electorales; presidirá el jefe político ó la persona que designe, y harán de escrutadores los dos comisionados que sean al efecto elegidos. Si por enfermedad, muerte ó por cualquiera otra causa no concurrense algun comisionado, se remitirá la copia certificada del acta que le corresponde al presidente, el cual la presentará á la junta para que se verifique el escrutinio.

Art. 27. En los pueblos donde hubiere varios partidos se hará el escrutinio general de todos ante el Ayuntamiento pleno del mismo pueblo, pero con separacion unos partidos de otros.

Art. 28. Hecho el resumen general de los votos por el escrutinio de las actas de los distritos electorales, el Presidente proclamará Diputado al candidato que hubiese obtenido mayor número de votos, decidiendo la suerte en caso de empate.

Art. 29. El Presidente y escrutadores en cada distrito electoral, y el Presidente y comisionados de la Junta general de escrutinio, resolverán cada dia definitivamente y á pluralidad de votos, cuantas dudas y reclamaciones se presenten, expresando las en el acta, como igualmente las resoluciones que acerca de ellas se hubieren acordado.

Art. 30. La junta de escrutinio no tendrá facultad para anular ninguna acta ni voto; pero podrá dejar consignadas en su acta las reclamaciones ó dudas que sobre este punto se presenten, y su opinion acerca de las mismas.

Art. 31. El acta original se depositará en el archivo del Ayuntamiento de la cabecera de partido; y una copia certificada de ella se pasará al jefe político.

Art. 32. El jefe político, oido el Consejo provincial, si no hubiere reclamaciones atendibles, y hallare arreglada la eleccion, estenderá el nombramiento correspondiente á los que hayan resultado diputados, y se lo comunicará para su conocimiento.

Art. 33. Si el jefe político, oido el consejo provincial, hallare nulidades en la eleccion, ó si hubiere reclamaciones contra su validez, pasará todos los documentos con su informe al Gobierno, el cual decidirá si es válida dicha eleccion ó si ha de verificarse de nuevo en el todo ó en alguna de sus partes.

Art. 34. El jefe político, de acuerdo con el consejo provincial, decidirá si el diputado electo tiene ó no las cualidades que para este cargo exige la presente ley y en la misma forma lo hará tambien sobre las solicitudes de exencion. De estas resoluciones podrán los interesados apelar al Gobierno, quien resolverá definitivamente.

Art. 35. El Diputado que fuese elegido por dos ó mas partidos, optará por uno de ellos: en los demas se procederá á nueva eleccion para su reemplazo. Tambien se procederá á nueva eleccion siempre que un diputado cese, por cualquier motivo, en el desempeño de su cargo; fuera del caso en que solo faltan seis meses para la renovacion ordinaria.

CONCLUYE la relacion de las reclamaciones de inclusion, exclusion y rectificacion respecto de las listas electorales publicadas en 8 de enero ultimo, la cual principió á insertarse en los dos números anteriores.

Rectificacion que debe hacerse en el distrito electoral de Bande, cuyas reclamaciones se han publicado en el número anterior.

Donde dice

Manuel Rodriguez, de Parada.

Debe decir

Manuel Rodriguez Parada, de Ginzo.

DISTRITO ELECTORAL DE CARBALLINO.

AYUNTAMIENTO DE BOBORÁS.

Inclusiones reclamadas.

Por pagar cuota suficiente con arreglo al artículo 14 de la ley.

Nombres de las personas reclamadas y su domicilio.

Don Manuel Tizon, de Moldes.

Nicolás Nuñez, de Jubencos.

Ramon Garcia, de Moldes.

Con arreglo al artículo 16.

Benigno Moure, maestro de Instruccion primaria, de Moldes.

Benito Martinez, cirujano de id.

Félix Munin, abogado de Jerez.

José Conde, abogado, de Astorga.

José María Nogueira, abogado, de Jubencos.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Manuel Pájaro, de Albarellos.

Francisco Labandeira, de Teás.

Joaquin Corbella, de Pazos.

Ramon Garcia Santos, de Albarellos.

Ramon Dieguez, de Pazos.

Debe decir

Manuel Pájaro, de Moreiras.

Francisco Labandeira, de Feás.

Joaquin Corvela, de Pazos.

Ramon Garcia Sanchez, de Moldes.

Ramon Dieguez, de Moldes.

AYUNTAMIENTO DE CARBALLINO.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

Antonio Garcia Centeno, de Carballino.

Agustin Rodriguez, de Barille.

Benito Rodriguez, del Carballino.

Benito Rodriguez, del Carballino.

Benito Rodriguez, del Carballino.

Benito Campo, del Carballino.

Carlos Fernandez, de Mesiego.

Domingo Rodriguez, de Torron.

Juan Penedo, de Longoselo.

José Alceiran, del Carballino.

Manuel Lopez, de id.

Manuel Perez, de Arcos.

Manuel Fernandez Maduro, de id.

Rafael Perez Nabeiras, de Arcos.

Ramon Perez, de Mesiego.

Vicente Romero, del Carballino.

Con arreglo al art. 16.

Camilo Penedo y Fajardo, Licenciado en jurisprudencia, de Pazos.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Bernardo Figueiredo, de Malarnas.

José Rodriguez do Monte, de Modelos.

José Figueiredo de idem.

Debe decir

Bernardo Figueiredo, de Mesiego.

José Rodriguez do Monte, de Pitira.

José Figueiredo, de idem.

AYUNTAMIENTO DE CEA.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

Agustin Rodriguez, de Cea.

Agustin Diaz, de idem.

Agustin Gonzalez, de idem.

Domingo Antonio Gomez, de idem.

Francisco Vazquez, de Mortilán.

Juan Benito Mosquera, de Lama.

José Rodriguez, de Fondo de Cea.

José Garcia, de idem.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Andrés Fernandez, de Lamas.

Pedro Gil, de Arenteiro.

Ramon Fernandez Mirela Perez, de Pereda.

Debe decir

Andrés Fernandez, de Lama.

Pedro Gil, de Arenteiro.

Ramon Fernandez Mirela, de Osera.

AYUNTAMIENTO DE IRIJO.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al artículo 14.

José Perez, de Campo.

Lorenzo Perez, de id.

Tomas Gonzalez, de Lourcio.

Exclusiones reclamadas.

Por no pagar cuota legal con arreglo al art. 14.

Antonio Bermudez, de Corneda.

AYUNTAMIENTO DE NASIDE.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

José Romero Vazquez, de Naside.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Benito da Bouza, de Garabanes.

José Fernandez Conde, de id.

Debe decir

Benito da Pousa, de Garabanes.

José Fernandez, de id.

AYUNTAMIENTO DE PIÑOR.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

Ramiro Fernandez, de Casmunio.

Fernando Fernandez, de Coiras.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Ramon Fernandez, de Casmunio.

Francisco Fernandez, de Coiras.

Debe decir

Ramon Fernandez, de Barrán.

Francisco Fernandez, de Barrán.

AYUNTAMIENTO DE SAN AMARO.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

José Ferreira, de S. Félix de Navio.

José Maria Sanchez, de id.

Miguel Garcia Caballero, de id.

Con arreglo al art. 16.

Luis Maria Quesada, cirujano, de Anlio.

Manuel Garcia Centeno, abogado de San Félix de Navio.

DISTRITO ELECTORAL DE ALLARIZ

AYUNTAMIENTO DE ALLARIZ.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

Nombres de las personas reclamadas y de domicilio.

D. José Mendez, de Briñal.
José Pérez, de Allariz.
Juan Bautista Colmenero, de id.
Leandro Miguez, de id.

Con arreglo al art. 16.

Mariano Garrán, abogado, de Allariz.
Venancio Gómez Seara, abogado de id.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Antonio Ferro, de Penamar.
Fernando Delgado, de Allariz.
Juan Blanco, de Laje.
Manuel Pacheco, de Seoane.
Martín Piñeiro, de Castro.
Manuel Carnicero, de Outeiro.
Manuel Sandiás, de Allariz.
Pedro Conde, de Iglesias.
Santiago Codin, de Queiroás.

Debe decir

Antonio Ferro, de Penamá.
Fernando Delgado, de Allariz.
Juan Blanco, de Outeiro de Laje.
Manuel Pacheco, de Torre de Seoane.
Mateo Piñeiro, de S. Mamed de Castro.
Manuel Carnicero, de Outeiro de Laje.
Manuel Sanchez, de Allariz.
Pedro Conde, de Iglesia de Queiroás.
Santiago Golin, de Requejo de Queiroás.

AYUNTAMIENTO DE RAIRIZ DE VEIGA.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Juan de Puga, de Allariz.
Agustín Cordón, de Ordes.
Benito Nogueiras, de Trijo.
Francisco Fernandez, de Bartacas.
Marcial Novoa, de Outeiriño.
Miguel Ambrosio, de Outeiriño.
Miguel González, de Silveira.
Manuel Villar, de Candás.
Miguel Domínguez, de Sabariz.
Pedro Opazo, de Osén.
Ramon Fernandez, Penelas de Celme.
José Salgado, párroco, de Rairiz.

Debe decir

Juan de Puga, de Rairiz.
Agustín Corderi, de Ordes.
Benito Nogueiras Azorciros, de Guimil.
Francisco Fernandez Filgueiras, de Guimil.
Marcial Novoa, de Rairiz.
Miguel Ambrosio, de Rairiz.
Miguel González, de Ordes.
Manuel Villar de Candás.
Manuel Domínguez, de Sabariz.
Pedro Opazo, de Guimil.
Ramon Fernandez Penelas, de Ordes.
José Salgado, párroco, de Congostro.

AYUNTAMIENTO DE SANDIANES.

Exclusiones reclamadas.

Por falta de domicilio.

Francisco Miguez, de Lampaza.
Santiago Vázquez, de Santana.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Lorenzo García, de Sandianes.
Felipe Blanco, de Castro.

Debe decir

Florencio García, de Sandianes.
Felipe Blanco, de Couso.

AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE SANTOS.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

Manuel Miguez, de Villar de Santos.
José Moreiras y Moreiras, de idem.

Debe decir

Manuel Miguez, de Parada.
José Morales y Morales, de Villar de Santos.

AYUNTAMIENTO DE JUNQUERA DE AMBIA.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

Andrés do Barrio, de Junquera de Ambia.

José Alonso Losada, de idem.
Rosendo do Bouzo, de Sobradelo.

Con arreglo al art. 16.

Manuel Besteiro, párroco, de Sobradelo.

Exclusiones reclamadas.

Por repetición de nombre.

Benito Fernandez, de Armariz.

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE MOLGAS.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

José Alonso, de Almoite.
Juan Garrido Vila, de Almoite.
José Cid, de idem.
José Ferreiro, de Ambia.
José Fernandez, de Baños.
José do Cabo, de idem.
José Pumar, de Ambia.
Juan Novilla, de Monte.
José Hermida, de idem.
José da Vila, de Ambia.
José Prieto, de Baños.
Patricio Carnicero, de Almoite.

Debe decir

José Alonso, de Baños.
Juan Garrido Vila, de idem.
José Cid, de Betán.
José Ferreiro, de Almoite.
José Fernandez, de Ambia.
José do Cabo, de idem.
José Pumar, de Almoite.
Juan Novilla, de Baños.
José Hermida, de idem.
José da Vila, de id.
José Prieto, de Ambia.
Patricio Carnicero, de Baños.

Exclusiones reclamadas.

Por falta de domicilio.

Agustín Quiroga, de Tioira.

AYUNTAMIENTO DE PADERNE.

Exclusiones reclamadas.

Por no pagar la cuota legal con arreglo al artículo 14.

José Conde, de Cantuña.
Juan Rodríguez, de Figueiroá.

AYUNTAMIENTO DE SARREBAUS.

Exclusiones reclamadas.

Por no pagar la cuota legal con arreglo al artículo 14.

Manuel Perez, de Lodeseo.

AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE BARRIO.

Inclusiones reclamadas.

Con arreglo al art. 14.

Antonio Carvallo, de Maus.
Manuel de Prado, de idem.

Rectificaciones reclamadas.

Donde dice

José Jangiro, de Arnuid.

Debe decir

José Ferreiro, de Arnuid.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NÚM. 59.

Anunciando la venta del caballo del Estado llamado *Reflejo*, existente en el depósito de esta capital.

Dispuesta por Real orden de 25 de enero último la venta del caballo llamado *Reflejo*, procedente del depósito del Estado, sito en el barrio de San Francisco de esta capital, he dispuesto que dicha enagenación tenga efecto en este Gobierno de provincia en subasta pública, ante mi autoridad y con asistencia del Delegado del ramo, el jueves 20 del actual y hora de doce de su mañana bajo las condiciones siguientes:

1.ª No se admitirá ninguna proposición por menos de 800 reales, que es el tipo de la tasa.

2.ª Aquellas se harán precisamente durante la primera media hora y en pliegos cerrados, conforme al modelo que á continuación se inserta.

3.ª Con los pliegos se acompañará la cantidad de 80 rs., que es el 10 por 100 de la referida tasa, ó bien el resguardo de la Caja de Depósitos, donde en defecto se ingresará. Esta fianza será devuelta en el acto á todos los interesados, menos á aquel que se declare mejor postor en el remate, cuyo importe total satisfará cuando éste sea aprobado por la Dirección general y se le haga entrega del caballo.

4.ª En el caso de presentarse dos ó más proposiciones iguales, se celebrará en el acto, únicamente entre sus autores, una segunda licitación abierta por el tiempo que designe el Presidente, no admitiéndose ninguna inferior á la cantidad de 10 reales.

Modelo de proposición.

Don F. T., vecino de..., enterado del anuncio publicado por el Gobierno de la provincia de Orense con fecha 7 del actual en el Boletín oficial del día... del mismo mes, y de los requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta del caballo llamado *Reflejo*, procedente del depósito de caballos padres del Estado, sito en esta capital y barrio de San Francisco, ofrezco por dicho caballo y con sujeción á los expresados requisitos la cantidad de... (se expresará en letra).

Orense 7 de febrero de 1862.—
Francisco Javier Camuño.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NÚM. 60.

Minas.

En el expediente de concesión de la mina de estaño denominada «S. Antonio de Padua» sita en el distrito municipal de Abion y terreno de la parroquia de Couso, instruido en esta sección á instancia de D. Fernando Perez Bobo, vecino de esta capital, ha dictado el Sr. Gobernador la providencia siguiente.

Admitido sin perjuicio de tercero este

registro, publíquese en el Boletín oficial, pónganse edictos en la tabla de anuncios de este Gobierno de provincia y remítase al Alcalde del término para que se fije en el sitio de costumbre, según dispone el art. 23 de la ley de 6 de julio de 1859; hágase saber á este interesado que en el preciso término de 20 días presente en la Sección de Fomento de este Gobierno de provincia el plano del terreno que comprende este registro ó certificación del Alcalde del término, acreditando tenerlo amojonado, manifestando haber ejecutado la labor legal conforme previenen los artículos 21 y 28 de dicha ley, en la inteligencia que de no ejecutarlo le parará perjuicio.

Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de 5 de octubre de 1859 para la ejecución de la ley de minería; se le hace saber por medio de este periódico oficial para los efectos que el mismo expresa.

Orense 5 de febrero de 1862.—El Gefe de la Sección de Fomento, Carlos Baamonde y Puga.

Don Francisco Javier Camuño, Gobernador civil de esta provincia.—Hago saber, que en este Gobierno se está instruyendo expediente sobre concesión de dos pertenencias de la mina de estaño denominada «San Antonio de Padua» á D. Fernando Perez Bobo, vecino de esta capital. Esta mina se halla situada en terreno de monte abierto del Ayuntamiento de Abion, término de la parroquia de Couso. La designación que hace el interesado es la siguiente:

Se tendrá por punto de partida los parajes que llaman Serra ó Serrade y dos Guerros, lindante el primero por naciente y poniente con Antonio Zabal, y mediodía con regato de Martín Ferreiro y Antonia Cortizo, y norte con María Guerra, Antonia de Prol, Manuel Zabal y otros; y el segundo por naciente con mina cerrada denominada «La Luz» y á cargo de José Portela, poniente con Andrés Gueira y mediodía con Braña de la mina dos Guerros. La primera pertenencia se circunscribe dentro de las demarcaciones espuestas desde la que se medirá con dirección norte en una estension desde naciente á poniente 209 metros, y de mediodía á norte 80 metros; la segunda bajo las demarcaciones ya dichas teniendo la dirección de la primera y mide por mediodía 120 metros, por norte 160 metros y por el mediodía 210 metros.

Lo que se anuncia al público á los efectos prevenidos en los artículos 23 y 24 de la ley de 6 de julio de 1859.

Orense 5 de febrero de 1862.—Francisco Javier Camuño.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaría.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Concentina para procesar á D. Antonio Domenech y Mullor, Teniente de Alcalde de Benilloba, ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Alicante ha regado al Juez de primera instancia de Concentina la autorización que solicitó para procesar á D. Antonio Domenech y Mullor, Teniente Alcalde de Benilloba.

Resulta: Que habiendo salido de ronda una noche el expresado Teniente Alcalde por encargo del Alcalde, que se hallaba indispuerto, encontró en la calle á las diez y media a Joaquín Domenech y habiéndole mandado retirarse á su casa por haberse así prevenido en los bandos de buen gobierno, respondió el Domenech que así lo haría; pero una hora después volvió á encontrarse el Teniente Alcalde en otro sitio; y como recombinase mandándole de nuevo retirarse, contestó el Domenech que no quería, dando muestras de estar ebrio, en cuya virtud el Teniente de Alcalde le mandó arrestar por desobediencia.

Que entonces se retiró algunos pasos el Domenech, y luego huyó precipitadamente cayendo al suelo al poco trecho á causa de la embriaguez y de hallarse embuzado en una manta; y habiendo agitado la ronda, compuesta del Teniente Alcalde, un alguacil y un guarda rural, estos dos últimos levantaron al caído y cogiéndolo por la una de su brazo le condujeron á la cárcel, en cuya puerta el Domenech, al propio tiempo que se resistía á entrar y desafiaba al alguacil, dijo también que estaba herido en la cabeza.

Que en el acto dispuso el Teniente Alcalde que un cirujano reconociese la lesión ocasionada por la caída, y resultando no ser cosa de cuidado, quedó en la cárcel el Domenech; y dada cuenta al Alcalde por el Teniente fué aquel puesto en libertad al siguiente día, y en el mismo celebró además el Alcalde jurio de faltas, en el que fué condenado Joaquín Domenech á cinco días de arresto por su desobediencia.

Que noticioso el Juzgado de Concentración de estos hechos, reclamó del Alcalde las diligencias que hubiese instruido; y enterado de la respuesta del Alcalde, acordó proceder contra el Teniente en virtud de excitación de Joaquín Domenech, quien se mostró parte en la causa alegando que la herida que había sufrido en la cabeza había sido consecuencia de un culatazo que el Teniente Alcalde le dió con una carabina que llevaba, y que además había cometido dicha autoridad el delito de detención arbitraria.

Que de las diligencias practicadas solo resultaron comprobados los hechos en los términos, que al principio se refiere; pues en cuanto á que la herida fué causada por el Teniente Alcalde y con una carabina, solo aparece la declaración del mismo Domenech, unánimemente desmentida por los testigos presentes, quienes afirman que el Teniente Alcalde no llevaba carabina y si su baston de autoridad.

Que el Juzgado, de acuerdo con el Promotor fiscal, sobreseyó en el procedimiento por no hallar motivo de responsabilidad criminal en la conducta del Teniente Alcalde según el resultado de las actuaciones; pero consultado el sobreseimiento con la audiencia de Valencia, lo dejó esta sin efecto, mandando continuar el procedimiento.

Que en su consecuencia pidió el Juzgado la autorización para procesar al Teniente Alcalde, expresando el Promotor en su dictamen que aquella debía pedirse en cumplimiento de lo mandado por la superioridad, mas no porque en su concepto hubiese méritos para el proceso, razón por la cual se veía en la imposibilidad de formular su dictamen, según está mandado, pues no habiéndose justificado del todo alguno no pueden determinarse los artículos del Código que sean aplicables al caso presente.

Que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, usó la autorización fundada en que resulta acreditado que la lesión de Joaquín Domenech fué producida por su caída, y en que el Teniente Alcalde, al detener á un hombre en la calle y fuertemente le sujetó su auto-

ridad, obró dentro de sus atribuciones gubernativas, y no incurrió en responsabilidad, puesto que antes de las 24 horas puso al arrestado á disposición del Alcalde.

Visto el art. 75 de la ley de 8 de enero de 1845, que autoriza al Alcalde para adoptar todas las medidas protectoras de la seguridad personal, de la propiedad y de la tranquilidad pública, con arreglo á las leyes y disposiciones superiores.

Visto el art. 86 de la misma ley de 8 de enero de 1845, según el cual los Tenientes de Alcalde, además de la parte que como Concejales les corresponde en las deliberaciones del Ayuntamiento, ejercerán las funciones que con arreglo á las leyes, instrucciones y reglamentos les cometa el Alcalde como á delegados suyos.

Vista la regla 29 de la ley provisional para la aplicación del Código penal, en que se dispone que la Autoridad gubernativa ó agente de la misma que detuvieren á una persona la pondrán á disposición del Tribunal competente dentro de 24 horas.

Considerando:

1.º Que no aparece justificada la culpabilidad del Teniente Alcalde de Benilloba respecto á la lesión sufrida por Joaquín Domenech, existiendo por el contrario datos suficientes para atribuir la causa de la lesión á la caída que dió cuando huyó precipitadamente.

2.º Que tampoco aparecen méritos para imputar al Teniente Alcalde el delito de detención arbitraria, puesto que, al detener preventivamente á un hombre que infringió los bandos de buen gobierno, desobedeció su Autoridad y daba muestras de estar ebrio; obró el Teniente Alcalde dentro de sus atribuciones, y cumplió con las disposiciones legales, dando cuenta al Alcalde de lo ocurrido y poniendo á su disposición al detenido antes de las 24 horas.

La mayoría de la Sección opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Alicante.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden comunicada á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Nos guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de diciembre de 1861.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Alicante.

(Gaceta de 21 del actual.)

TERCERA SECCION.

Juzgado de primera instancia del distrito de Palacio de Madrid.

Don José Antonio de la Llera, magistrado de Audiencia fuera de esta corte y juez de primera instancia del distrito de Palacio de la misma.—Hago saber: Que en los autos que en dicha juzgado y por la escribanía de número de D. Santiago Urdiales se han seguido á instancia de D. Mariano Lloves contra D. Blas Lopez Fuentes y D. Benito Tómes, sobre tercera de dominio á bienes embargados á éste á petición del Lopez Fuentes, he dictado la siguiente sentencia:

En la villa y corte de Madrid á 18 de enero de 1862, el Sr. D. José Antonio de la Llera, magistrado de Audiencia fuera de esta capital y juez de primera instancia del distrito de Palacio de la misma; habiendo visto estos autos promovidos por D. Mariano Lloves, sobre tercera de dominio á ciertos bienes embargados á D. Benito Tómes á instancia de D. Blas Lopez Fuentes.

Resultando que D. Mariano Lloves, por medio del procurador D. Juan Caldeiro, interpuso demanda de tercera de dominio en escrito fecha 5 de diciembre de 1860 á los bienes comprendidos en la relación del folio 4, que se hallaban em-

bargados en pleito que sostenía con Don Benito Tómes.

Resultando que admitida la demanda se confirió traslado de ella á D. Blas Lopez Fuentes y á D. Benito Tómes, contestándola el primero por medio del procurador D. Simón Gargallo de Oñate, manifestando al parecer implícitamente la conformidad con ella; pero solicitando que se le absolviere de la demanda con expresa condonación de costas á quien correspondiese, pues que era responsable de todos los perjuicios D. Benito Tómes.

Resultando que por no haberse personado en los autos D. Benito Tómes, acusada ama rebelde por el anterior, se declaró por contestada la demanda en 23 de marzo del mismo año, y que respecto de él se entendiese en las actuaciones con los estrados del juzgado en su ausencia y rebeldía.

Resultando que D. Mariano Lloves en su escrito de réplica enmendó la demanda, eliminando de ella la cara señalada con el número 9 de orden de la relación del folio 4, ó sea la que en la escritura hipotecaria ocupa el número 25, según otra relación que presentó folio 133.

Resultando que la parte de D. Blas Lopez Fuentes solicitó que los autos se recibieran á prueba, y que dentro del término de ley se hiciese practicar las propuestas y admitidas á las dos partes que se han personado.

Resultando que D. Blas Lopez Fuentes en su escrito de alegato de buena prueba, ha manifestado terminantemente al folio 295, que no se opone á la tercera de dominio interpuesta por D. Mariano Lloves, y que está conforme en que se excluyeran del embargo y de la hipoteca los bienes reclamados en la relación por éste presentada.

Considerando que D. Mariano Lloves ha probado cumplidamente la propiedad de las quince fincas de las diez y seis comprendidas en la relación del folio 158, y que la otra finca la eliminé de la demanda en su escrito de réplica.

Considerando que D. Blas Lopez Fuentes ha dado prueba de que se sustancie la demanda de tercera de dominio interpuesta por D. Mariano Lloves, por mas que alegue que D. Benito Tómes le ha entuerto con su mala fe en este y otros pleitos, causándole gastos y dispendios de consideración.

Fallo: que deba de declararse y declaro haber lugar á la tercera de dominio interpuesta por D. Mariano Lloves; y en su consecuencia mandó que se desahogara del embargo y de la hipoteca las quince fincas que son objeto de la tercera, dejándolas á su disposición con los frutos y rentas que han debido producir durante el embargo; poniéndose testimonio de esta sentencia en el pleito principal, y condenando expresamente en costas á D. Blas Lopez Fuentes, desde la contestación á la demanda ó sea desde el folio 111. Se reservó á D. Mariano Lloves y á D. Blas Lopez Fuentes el derecho de que se oían asistidos para reclamar los daños y perjuicios que se les hayan irrogado, contra quien, cómo y cuándo les conviniese. Y mandó á la escribanía y rebeldía de D. Benito Tómes, publique esta sentencia por medio de edictos y de los periódicos oficiales, según previene el artículo 1170 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Así por esta sentencia definitiva lo proveyó, mandó y firmó S. S. por ante mí el escribano de número, de que doy fe.—José Antonio de la Llera.—Santiago Urdiales.

Cuya sentencia se inserta en el Boletín oficial de la provincia de Orense, en cumplimiento de lo que previene el artículo 1190 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Dada en Madrid á 30 de enero de 1862.—José Antonio de la Llera.—Por mandado de S. S., Santiago Urdiales.

Juzgado de Guerra de Orense.

Don Francisco Ortiz y Sartorio, caballero con cruz y placa de la Real y militar Orden de San Hermenegildo, dos veces de la de San Fernando, con recordado con otras varias cruces de distinción por méritos de guerra, brigadier de la línea de infantería y gobernador militar de la provincia de Orense.

Y el licenciado D. José Espada, caballero comandante de Isabel la Católica y Asesor del juzgado de guerra de la misma provincia.—Por el presente edicto se cita, llama y emplaza á José Portela y Benito Estévez, vecinos de la parroquia de Baquenses, alcaidia de Yerca, para que dentro del término de treinta días á contar desde la fecha de su publicación en el Boletín oficial de la provincia, se presenten en este juzgado de guerra á responder á los cargos que contra ellos resultan de la causa formada á los ocultos del desertor Juan Benito Arias de la propia vecindad; bajo apercibimiento que pasado el enunciado término sin efectuarlo se dará á aquella el trámite que corresponda y las providencias que se dicten para parar el perjuicio consiguiente.

Orense enero 26 de 1862.—Francisco Ortiz.—José Espada.—Por mandado de S. S., Vicente M. Puig.

SECCION DE ANUNCIOS.

PRIVILEGIOS DE INDUSTRIA Y DE MARCA.

COLECCION

DE REALES DECRETOS Y ORDENES

QUE CONSTITUYEN LA LEGISLACION

QUE RIGE SOBRE ESTA MATERIA.

La importancia de las disposiciones que anunciamos, por las muchas dudas que resuelven acerca de los requisitos indispensables para obtener privilegios de invención ó introducción, nos ha decidido á publicarlas en un cuaderno de poco volumen, para que puedan consultarse por los interesados en esta clase de asuntos, y evitar de este modo las continuas consultas que se ve precisado á hacer en las oficinas de las Secciones de Fomento ó en el Ministerio del ramo, el que, tratando de obtener un privilegio, ignora la forma en que ha de hacer la solicitud y los deberes y derechos que el privilegio lleva consigo. Respecto á las marcas, tampoco son muy conocidas las disposiciones que regulan y legitiman su uso y propiedad, y por eso nos ha parecido hacer un servicio á los fabricantes, proporcionándoles también esta parte tan interesante de la legislación.

Forma un cuaderno de 16 páginas, y se vende en Madrid en la imprenta del Boletín oficial, calle de la Huelga número 19, cuarto bajo á precio de 8 rs. ejemplar.

A voluntad de su dueño, se venden una casa sita en la calle de los Arcedianos de esta ciudad señalada con el número 12, cinco fanegas de cenitero de renta que se perciben en el lugar de la Lama de Toubes Alcaidia de la Peroja, con obligación de condonación á esta capital; y diez fanegas, asimismo de cenitero y dos gallinas también de renta que se cobran en el lugar de Mazaira, parroquia de Santa Eulalia del Babil áujo de Villarrubín. Las personas que quieran interesarse en su adquisición pueden concurrir á la casa número 3 sita en la calle de San Cosme de esta ciudad, en donde se le darán las debidas esplicaciones.

Imprenta de D. Cesáreo Paz y H.